TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
SISTEMA ORAL – DESPACHO No. 003

ESTADOS – AVISOS

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-03-administrativo-de-narino;jsessionid=32D650D2D5051FC550B5AD9DC5520C72.worker4>

Fecha: 25 de octubre de 2021.

MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCIA OJEDA INSUASTY

En este documento puede consultar las providencias notificadas

RADICACIÓN	MEDIO DE CONTROL	PARTES – ACTO OBJETO DE CONTROL.	AUTO	FECHA AUTO
52001-23-33-000-2013-00080-00	Acción de repetición	Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Demandado: José Francisco Gómez Narváez.	Auto que ordena correr traslado a liquidación de costas.	22-10-2021.
52001-23-33-000-2020-01094-00	Reparación directa	Demandante: Cecilia Mesa Torres y otros. Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otros.	Auto que decide recurso de reposición contra auto que admite la demanda.	22-10-2021.
52001-23-33-000-2020-01131-00	Nulidad y restablecimiento del derecho - Controversias contractuales.	Demandante: Soluciones Integrales de Oficina S.A.S. Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P. y otros.	Auto que declara falta de jurisdicción.	22-10-2021.
52-001-23-33-000-2020-01174-00	Nulidad y restablecimiento del derecho.	Demandante: Martha Viviana Estrada. Demandado: Centro Hospital Señor de la Divina Misericordia de Puerres E.S.E.	Auto que declara falta de competencia.	22-10-2021.

52-001-33-33-003-2017-00162-00. (5300)	Ejecutivo	Demandante: José del Cristo Cepeda Mesa. Demandado: UGPP.	Auto que resuelve recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago.	22-10-2021.
52001-33-33-007 - 2017 -00140-00 (9897)	Reparación directa	Demandante: Bladimiro Bados Rosero y otros. Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.
52001-2333-008 -2017 -00037-00 (9927)	Nulidad y restablecimiento del derecho.	Demandante: Cesar Aureliano Acosta. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.
52001-33-33-007 - 2019-00107-00 (9928)	Nulidad y restablecimiento del derecho.	Demandante: Elber Darío Jiménez Eraso. Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.
52001-33-33-005-2019-00183-00 (9964)	Reparación directa	Demandante: Anderson José Burbano Muñoz y otros. Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.

<p>52001-33-33-008-2017-00262-00.</p> <p>(9999)</p>	Reparación directa	<p>Demandante: Sofía Suarez de Benavides.</p> <p>Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.</p>	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.
<p>52001-33-33-004-2016-00273-00.</p> <p>(10007)</p>	Reparación directa	<p>Demandante: Neri Oliva Villota y otros.</p> <p>Demandado: Municipio de Pasto.</p>	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.
<p>52-001-33-33-005-2019-00148.</p> <p>(10029)</p>	Controversias contractuales	<p>Demandante: Carrocerías el Sol S.A.S.</p> <p>Demandado: Municipio de Ipiales.</p>	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.
<p>52001-33-33-003-2018-00189-00</p> <p>(10082)</p>	Nulidad y restablecimiento del derecho.	<p>Demandante: Alvear Edier Enrique Ayala.</p> <p>Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.</p>	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.
<p>52001-33-33-003-2018-00247-00</p> <p>(10127)</p>	Nulidad y restablecimiento del derecho.	<p>Demandante: Luis Enrique Munares Legarda.</p> <p>Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.</p>	Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.	22-10-2021.

<p>52-001-33-33-009-2018-002-00</p> <p>(10135)</p>	<p>Reparación directa</p>	<p>Demandante: Lucia de Jesús Benavides Villareal.</p> <p>Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.</p>	<p>Admite apelación de sentencia y corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión.</p>	<p>22-10-2021.</p>

Consulta de Procesos Rama Judicial -
<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/Index>
 Despacho 03 Magistrada Sandra Lucia Ojeda Insuasty

Clase de acción: Acción de repetición

Radicación: 52001233300020130008000¹

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Demandado: José Francisco Gómez Narváez.

Auto Interlocutorio No. D003-419-2021

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
SALA UNITARIA DE DECISIÓN
MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY²**

San Juan de Pasto, veintidós (22) octubre de dos mil veinte uno (2021)

I. Antecedentes

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2013, decide negar las pretensiones formuladas por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y condena en costas a la parte demandante (fl. 380-397). El Consejo de Estado confirma la decisión a través del fallo calendarado el 06 de diciembre de 2017 y condena en costas de segunda instancia a la parte demandante. (fl. 471-504)

El Tribunal Administrativo de Nariño a través de auto del 28 de febrero de 2018³, ordena liquidar por secretaria las costas y agencias en derecho (fl. 508), así las cosas, secretaría el 05 de marzo de 2018, da cumplimiento a lo ordenado. (fl. 513).

La parte demandante a través de oficio radicado el 28 de febrero de 2018 solicita al Tribunal Administrativo de Nariño, realice una liquidación concentrada de las costas y agencias en derecho causadas en primera y segunda instancia (fl. 515-518) y el 20 de marzo de 2018 interpone recurso de reposición en subsidio apelación respecto a la liquidación de costas de fecha 05 de marzo de 2018 (fl. 520-524)

A través de auto del 13 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve: (i) desvincular la liquidación de costas efectuada por Secretaría el 05 de marzo de 2018, (ii) no dar curso a los recursos interpuestos; (iii) liquida las agencias en derecho y (iv) ordena a Secretaría proceda a elaborar la liquidación de costas, siguiendo el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Secretaría efectuó la liquidación.

¹ Expediente visible en la plataforma mercurio <http://200.91.192.149:8080/mercurio/index.jsp>

² Magistrada desde el 3 de julio de 2018

³ En cabeza de la Magistrada Gloria Dorys Álvarez García

Con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020, PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020, PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020, PCSJA2011546 de 25 de abril de 2020, PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020 y PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020 y PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 en virtud de los cuales los términos judiciales se suspendieron entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, salvo algunas excepciones, entre las cuales no se incluyeron los procesos electorales. Así mismo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, adoptó el Acuerdo No. CSJNAA20-39 del 16 de julio de 2020 por el cual dispuso el cierre de las sedes judiciales y dependencias administrativas ubicadas en la cabecera del Circuito Judicial de Pasto temporalmente. Así mismo, el plan de digitalización dispuesto por el Consejo Superior inició en el mes de enero de 2021 con tan solo 15 procesos y luego los restantes que se remitieron para adelantar dicho trámite, no obstante, no se tuvo acceso a la plataforma MERCURIO donde se encontraban los expedientes.

En consecuencia, una vez digitalizado el proceso y siendo posible acceder a la plataforma digital, se procede a resolver lo pertinente.

II. Consideraciones y decisión

Ahora bien, leído el Código de Procedimiento civil, se tiene lo siguiente:

“ARTÍCULO 393. LIQUIDACION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo [626](#) de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo [627](#)> <Artículo modificado por el artículo [43](#) de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las costas serán liquidadas en el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que las imponga o la de obediencia a lo resuelto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al magistrado ponente o al juez aprobarla u ordenar que se rehaga.
2. La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó

personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas.

4. Elaborada por el secretario la liquidación, quedará a disposición de las partes por tres días, dentro de los cuales podrán objetarla.

5. Si la liquidación no es objetada oportunamente, será aprobada por auto que no admite recurso alguno.

6. Formulada objeción, el escrito quedará en la secretaría por dos días en traslado a la parte contraria; surtido éste se pasará el expediente al despacho, y el juez o magistrado resolverá si reforma la Liquidación o la aprueba sin modificaciones”.

Así las cosas, revisado el expediente, se observa que Secretaría liquida las costas de primera y segunda instancia⁴ (fl. 533 – 534), sin embargo, no se observa que haya corrido traslado de la liquidación de las costas a las partes, por lo expuesto, se devolverá el proceso a Secretaría para lo propio.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño, en Sala Unitaria,

RESUELVE

PRIMRO: DEVUÉLVASE el expediente a Secretaría para que **INMEDIATAMENTE EJECUTORIADO** este auto **corra traslado a las partes, por el término de tres días de la liquidación de costas visible a folio 533 y siga el procedimiento señalado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

⁴ Debe considerarse que si bien en la liquidación solo se habla de costas de primera instancia, lo cierto es que el auto que le antecede y que se cumple, incluye la liquidación de las agencias en derecho en primera y segunda instancia, por lo que se entiende que la liquidación efectuada por la Contadora corresponde a la primera y segunda instancia.

Firmado Por:

**Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

38376726feb5624333e7f0c7429100e9eaf3279e7ef30446af3cb17cac57a8f9

Documento generado en 22/10/2021 03:49:25 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

Medio de control: Reparación directa
Radicación: 52-001-23-33-000-2020-01094-00.
Demandante: Cecilia Mesa Torres y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Decide recurso de reposición contra auto que admitió la demanda.

Auto interlocutorio N° D003-417-2021

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
SALA UNITARIA DE DECISIÓN**

MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY

San Juan de Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

I. Asunto

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de reposición que el apoderado de la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. presentó contra el auto que admitió la demanda.

II. Antecedentes.

- Este despacho admitió la demanda de la referencia, una vez se revisó el memorial de corrección presentada por la apoderada de la parte demandante, dentro del término legal concedido para el efecto (archivo en PDF N° 17) y se dispuso la notificación a las partes en los términos legales.
- El auto en comento se notificó por estados y al correo de las partes el 18 de mayo de 2021 (archivos en PDF N° 18 y 19).
- Mediante memorial enviado por correo electrónico el 21 de mayo de 2021, el apoderado de Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. presentó recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda (archivo en PDF N° 21).
- El traslado del recurso se surtió por el lapso de tres (3) días, del 27 al 31 de mayo de 2021 (archivo en PDF N° 22).
- La parte demandante se pronunció sobre el recurso propuesto mediante memorial remitido el 28 de mayo del año en curso (archivo en PDF N° 23).

III. Argumentos y decisión del recurso de reposición interpuesto contra el auto de admisión de la demanda.

3.1. Recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. (archivo en PDF N° 21).

El apoderado de la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S., sustentó el recurso de reposición que presentó contra el auto admisorio de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

1. Acerca de la cuantía de la demanda.

- Considera que en este caso la demanda debió rechazarse, por cuanto la parte actora no cumplió con el requisito de estimar en forma razonada la cuantía, en los términos señalados en los artículos 157 y 162 del C.P.A.C.A., por lo que debió darse aplicación a lo dispuesto en el numeral 2 del art. 169 del referido estatuto, teniendo en cuenta que este fue uno de las causales de inadmisión.
- Indicó que en el acápite de cuantía la parte actora señaló un cálculo de \$750.000.000, correspondiente a la presunta depreciación comercial causada en el predio con matrícula inmobiliaria No 240-162339 y que tal valor fue computado en el informe del evaluador perito Albán Hidalgo, no obstante, señala que esta suma no se encuentra en el documento elaborado por el evaluador y tampoco corresponde a la depreciación reclamada, sino al valor total y comercial del inmueble, lo cual no se ajusta a las pretensiones de la demanda, tal como lo indicó el despacho.
- Añade que en el documento llamado “informe de avalúo comercial Lote San Rafael vereda El Obraje, municipio de Tangua” (fl. 188-198), se aprecia que el resultado es de \$768.709.100, cifra diferente a la indicada por la parte actora y que no corresponde a la depreciación alegada, por lo que al menos que la parte actora hubiese pretendido en el libelo, la compra del bien, la suma ya referenciada no se relaciona con las súplicas de la demanda y menos se explica cómo se obtuvo la cifra mencionada.
- En suma, dijo que: (i) el valor señalado pro la parte actora para establecer la competencia del juez, no está indicado en el estudio del evaluador; (ii) el estudio corresponde al valor total del inmueble y no a la depreciación presuntamente sufrida; (iii) el monto calculado por el evaluador incluye el predio que ya fue adquirido y pagado por la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S.
- Sobre este tema, citó diversos pronunciamientos judiciales y doctrinales que tratan sobre la importancia de determinar con precisión este aspecto al momento de admitir la demanda, insistiendo en que debe ser razonada y desligada de apreciaciones caprichosas de la parte actora.

2. De la desvinculación de SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S.

- Solicitó que se desvincule de la demanda a Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. teniendo en cuenta que, si bien dicha entidad hace parte de la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S., esta última es una persona jurídica diferente de Sacyr concesiones y tiene un objeto jurídico distinto. Además, argumenta que no tiene relación alguna con el proyecto de infraestructura vial Rumichaca-Pasto, de ahí que no está ligada a los hechos y pretensiones de la parte actora, es decir, no tiene legitimación material en la causa por pasiva.

Por todo lo expuesto, solicitó que se reponga la decisión de admitir la demanda y se rechace en su lugar. De otra parte, solicitó que se desvincule a Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. por cuanto no tiene a su cargo la ejecución del Contrato de Concesión No 0015 de 2015, ni la obra de infraestructura Rumichaca – Pasto y tampoco tiene relación legal, contractual ni responsabilidad civil extracontractual con la parte actora.

3.2. Postura de la parte demandante frente al recurso interpuesto (archivo en PDF N° 23).

La parte demandante se pronunció frente al recurso interpuesto en los siguientes términos:

- Indicó que según el art. 160 del C.P.A.C.A. y los arts. 73, 74, 75, 76 y 77, uno de los requisitos para comparecer al proceso es el derecho de postulación, en virtud del cual solo puede intervenir a través de abogado inscrito excepto en los casos en los que se acepta la intervención directa, así mismo, indica que el art. 74 establece cuáles son las formalidades de los poderes
- En cuanto a los requisitos para interponer recursos, señaló que también se exige la presentación de memorial poder. En relación con el recurso de reposición interpuesto indicó que, si bien el Dr. Ortega Ordoñez comparece como apoderado de la Concesionaria Vial Unión del Sur y de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S, no se allegó el poder para interponer el recurso ni aporta prueba sobre el particular.
- En cuanto al argumento de la cuantía, expresó que no le asiste razón a la parte demandada, en tanto el valor de \$750.000.000 se refiere al valor de uno de los lotes identificado con matrícula inmobiliaria N° 240-162339, no al valor total contenido en el informe pericial, pues aquél contiene otros elementos que dan un valor mayor, esto es, la suma de \$ 768.709.000,00.
- Considera que el requisito de fijar la cuantía se cumplió a cabalidad, en tanto este se requiere para definir la competencia del juez y la suma se extrae del monto más alto de las pretensiones, siendo competencia de este despacho su conocimiento, conforme las normas, la jurisprudencia y la doctrina sobre el tema que cita en su escrito, conforme a la cual, no se requiere que se arrime prueba de la cuantía señalada en la demanda, sino que, la fijación se

haga conforme a razones o argumentos serios encaminados a mostrar porqué se estima en esa cantidad.

- En cuanto a la desvinculación de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. solicitó que se despache en forma desfavorable, en tanto de los documentos allegados, se observa con claridad la participación tanto de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S, y Herdoiza Crespo Construcciones Colombia S.A.S., por esta razón se vinculó a las demandadas, ya que así se confirma la participación de estas en el desarrollo vial del proyecto.

3.3. Recurso procedente contra el auto que admite la demanda. Oportunidad para presentar el recurso.

De acuerdo con el art. 242 del C.P.A.C.A., el recurso de reposición procede, salvo norma en contrario, contra los autos que no sean susceptibles de apelación o súplica y en cuanto a su oportunidad y tramite, la norma en comento remite a las disposiciones del C.P.C, hoy Código General del Proceso.

Ahora bien, en relación con el auto por el cual se admite la demanda, la Sala advierte que no es susceptible de apelación, en tanto no se encuentra dentro del listado consagrado en el art. 243 del C.P.A.C.A., así mismo, tampoco se encuentra dentro de aquellas providencias no susceptibles de recursos ordinarios, de conformidad con lo regulado en el art. 243A del mismo estatuto.

De igual forma, acota la Sala que tampoco existe norma especial que contemple su interposición, por lo tanto, el recurso procedente es el de reposición, en los términos indicados en el art. 242 antes mencionado.

Respecto a la oportunidad, el art. 318 del C.G.P. prevé lo siguiente:

“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. *Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.*

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

*El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. **Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.***

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.” (Destaca la Sala).

Así las cosas, tenemos que la providencia de admisión se notificó por estados electrónicos y por mensaje de datos a la dirección electrónica de las partes y el Ministerio Público, el 18 de mayo de 2021 (archivos en PDF N° 18 y 19), de allí que los tres días para recurrir acorde a lo señalado en el art. 318 antes transcrito, vencían el 21 de mayo de 2021.

El apoderado de la Concesionaria Vial Unión del Sur remitió el escrito contentivo del recurso al correo electrónico del Despacho el 21 de mayo de 2021 (archivo en PDF N° 21), es decir, dentro del término legal para el efecto.

De igual forma, se surtió el traslado por el lapso de 3 días que prevé el art. 110 del C.G.P., en esta medida, procede su estudio de fondo.

3.4. Decisión del recurso de reposición

3.4.1. Cuestión previa – poder allegado con el escrito contentivo del recurso

Antes de decidir el recurso propuesto, la Sala considera necesario establecer si el Dr. Andrés Fernando Ortega Ordoñez, **quien en el recurso de reposición dice actuar en calidad de apoderado del Consorcio Vial Unión del Sur y de Sacry Concesiones Colombia S.A.S.** aportó poder que lo faculte para actuar a nombre de las mencionadas entidades, pues la parte demandante aduce que no se allegó dicho documento.

Al efecto, se observa que en el PDF No. 20 obra documento allegado al correo del despacho, remitido desde el correo electrónico hmendez@uniondelsur.co poder conferido por el señor Germán de la Torre Lozano, en condición de representante legal de la **Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S.** a los abogados Héctor León Mendez Parra y Andrés Fernando Ortega Ordoñez, para que asuman la defensa de la entidad en este asunto en los términos de los artículos 73 y siguientes del Código General del Proceso y el art. 5º del Decreto 806 de 2020.

El poder se confiere entre otros objetos, para que los apoderados *“asuman la defensa de la Compañía del presente asunto y actúen en nombre y representación de la misma, en virtud de todo lo cual se les confieran las siguientes facultades:*

*1. Representar a la Compañía en todo lo relacionado con el referenciado proceso. Dentro de esta facultad está comprendida la representación en todas las actuaciones procesales, **interposición de recursos**, la suscripción y aceptación de todos los documentos y declaraciones que sean necesarios (actas, acuerdos, etc.), sin que en ningún evento se pueda alegar que los apoderados carecen de facultades para representar a la Compañía.”*

De igual forma cuenta con la antefirma de quien lo confiere, quien de acuerdo al certificado de existencia y representación legal allegado, figura como representante legal de la Concesionaria (páginas 9 a 19 PDF No. 20).

Sin embargo, no ocurre lo mismo con **Sacyr Concesiones Colombia SAS**, respecto a la cual, en el recurso, el Dr. Ortega afirma se le confirió poder y dijo adjuntar el certificado de existencia y representación legal, sin embargo, leída la impugnación, únicamente se allegó el documento de Cámara de Comercio correspondiente a la Concesionaria Vial Unión del Sur, así mismo, se omitió adjuntar el mandato correspondiente, siendo que solo se presentó el de la última de las mencionadas.

En esta medida, la Sala estima que se cumplió con el requisito del derecho de postulación pero únicamente respecto a la Concesionaria Vial Unión del Sur, por lo que es dable reconocer personería para actuar a los mencionados profesionales del derecho, en nombre de la citada entidad, más no, al Dr. Ortega respecto de **Sacyr Concesiones Colombia SAS** pues no se allegó el poder respectivo.

No obstante, se aclara que se reconocerá personería para actuar a los apoderados, indicando que uno obra como apoderado principal y otro como suplente, en tanto en virtud del art. 75 del C.G.P., en ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona.

Ahora bien, se precisa que aunque el apoderado recurrente únicamente lo es de la Concesionaria Vial Unión del Sur, dicha circunstancia no es óbice para que interponga el recurso solicitando la desvinculación de **Sacyr Concesiones Colombia SAS**, en tanto se trata de impugnación del auto admisorio de la demanda que dispuso, entre otras cosas, la notificación y traslado a la entidad antes señalada.

Aclarado lo anterior, pasa la Sala a referirse a los argumentos de recurso.

3.4.2. La cuantía.

Refiere el apoderado que la parte actora no señaló en forma razonada la cuantía dado que no correspondería a la depreciación sino al valor total de uno de los predios, además, indica que se señalan valores diferentes para los inmuebles que motivan la reclamación elevada en la demanda.

Al efecto, la Sala reitera los argumentos expuestos en el auto admisorio, indicando que la parte actora sí asignó un valor por este ítem, que corresponde a la suma de \$750.000.000 y aunque no se especificaron las operaciones o cálculos de donde se obtiene el monto solicitado, lo cierto es que en esta etapa procesal no es posible constatar lo indicado frente a tal aspecto, por lo que el Despacho debe atenerse a lo dispuesto por la parte demandante en este aspecto y tener por subsanado tal requisito.

La Sala precisa que la estimación de la cuantía únicamente define la competencia para conocer del asunto, no es definitoria del valor que finalmente se reconocerá como parece entenderlo el apoderado de la parte recurrente, pues esta situación se define en la sentencia si se estima que las pretensiones tienen vocación de prosperidad y de acuerdo con lo probado en el proceso.

De otro lado, aunque la parte actora no subsanara este aspecto, la Sala estima que ello no es razón suficiente para rechazar la demanda, pues de hacerlo se incurriría en exceso ritual manifiesto, privilegiando las formas sobre el derecho al acceso a la administración de justicia.

Al respecto, vale la pena señalar que el Consejo de Estado¹ razona que, si bien la estimación de la cuantía es importante para determinar competencia, el juez está facultado para efectuar las valoraciones necesarias para encauzar el proceso, lo cual también implica aspectos tales como la determinación de la cuantía:

“(…) El A quo tiene razón en cuanto a la importancia de la cuantía y su estimación correcta y razonada para la determinación de la competencia, sin embargo, la aplicación desmedida de este requisito procedimental no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la administración de justicia, brindando así mayor importancia a la forma que al derecho sustancial pues, obrar de esa manera es a todas luces incurrir en decisiones que podrían afectar o quebrantar derechos de arraigo constitucional.

Además, no puede perderse de vista el rol preponderante del juez en la conducción y dirección del proceso contencioso administrativo, todo ello tendiente a evitar decisiones que resquebrajen los principios democráticos del modelo de Estado definido en la Carta Superior, de tal manera que, el juez debe hacer las valoraciones necesarias y tomar las medidas que se requieran a fin de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia, muy a pesar de las falencias que se presenten en el proceso pero que, con la actuación proactiva del director del proceso y con base en la

¹ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B - CONSEJERA PONENTE: DRA. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ - Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2017. Expediente: 25000234200020120087701 (2604-2013) - Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho. Demandante: Héctor Javier Garzón Urrea. Demandado: Nación-Presidencia de la Republica- Departamento Administrativo de Seguridad en supresión-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional de Colombia. Trámite: Ley 1437 de 2011 - Asunto: La exigencia de los presupuestos de la demanda no puede convertirse en obstáculo para el acceso a la administración de justicia. Decisión: Revoca auto que rechazó la demanda por falta de estimación razonada de la cuantía para determinar la competencia. Apelación de auto

documentación para el saneamiento necesario, le permitan encausar el proceso y de esa manera cumplir con el cometido estatal...” (Negrillas propias).

A lo dicho se suma que, no es menester que el demandante adjunte prueba que soporte la cuantía que hizo en la demanda, no es eso lo que exige la norma, sino únicamente que la razone, carga que se cumplió en este caso, en el sentido de explicar que la suma estimada se tomó del informe de avalúo presentado en enero de 2020 y que según el mismo libelo, sería la pretensión mayor correspondiente a la depreciación del bien. En ese entendido, no es este el momento procesal para determinar si el mencionado avalúo demuestra la suma que se persigue sea cancelada en el fallo.

Por lo expuesto, no procede reposición del auto por este punto.

3.4.3. Desvinculación del proceso de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S.

En cuanto a la desvinculación de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. que solicita el apoderado de la parte recurrente, la Sala observa que la parte actora dirigió la demanda en contra de dicha entidad, teniendo en cuenta que *“La Concesionaria Vial Unión Del Sur S.A.S, empresa creada por la fusión de Sacyr Concesiones S.A.S quien tiene un 60 % de participación en el proyecto y Herdoiza Crespo Construcciones Colombia quien tiene un 40 % de participación en al proyecto y quienes suscribieron el contrato de mantenimiento y construcción de la doble calzada vía panamericana tramo comprendido entre Catambuco - Rumichaca con la Agencia Nacional De Infraestructura ANI y el Ministerio De Transporte”, mediante contrato App 015 de 2015.”* (Carpeta No. 15 – archivo en PDF “REFORMA DEMANDA REPARACION DIRECTA CECILIA -” página 2)

Así las cosas, la Sala estima que la parte actora justificó la inclusión de dicha entidad como parte demandada en el libelo y en esta medida, se ordenó su notificación. Y a esto lo que debe limitarse la actuación en esta etapa procesal, siendo cuestión ya para otra fase, el estudio de su legitimación o no. En otras palabras, no es viable analizar en esta oportunidad, si le asiste o no legitimación a Sacyr Concesiones Colombia SAS en relación con los hechos debatidos, cuestión que por ejemplo, podrá estudiarse cuando si se formula una excepción en tal sentido, pero no, ahora cuando sin duda alguna, la parte actora decidió elegirla como uno de los sujetos demandados.

Por esta razón no se repondrá el auto por este aspecto.

Así las cosas, la Sala estima que no hay lugar a reponer el auto admisorio de la demanda, de acuerdo con lo indicado en líneas precedentes.

En firme este auto, la Sala decidirá lo pertinente en relación con la reforma de la demanda presentada por la parte demandante

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño, en Sala Unitaria de Decisión,

RESUELVE

PRIMERO.- NO REPONER el auto calendado al 14 de mayo de 2021 en virtud del cual se admitió la demanda presentada por la señora Cecilia Mesa Torres y otros por conducto de apoderado judicial, contra la Agencia Nacional de Infraestructura y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- RECONOCER personería para actuar en calidad de apoderado principal de la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. al Dr. Héctor León Méndez Parra, identificado con C. C. No. 1.022.355.820 y T.P. No. 220.399 del C. S. de la J. y como apoderado suplente al Dr. Andrés Fernando Ortega Ordoñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.277.335 y T.P. No. 218.687 del C. S. de la J. en los términos y para los efectos conferidos en el memorial poder que presentaron con el escrito del recurso.

TERCERO.- NO RECONOCER al Dr. Andrés Fernando Ortega Ordoñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.277.335 y T.P. No. 218.687 del C. S. de la J. como apoderado de a Sacyr Concesiones Colombia SAS

CUARTO.- NOTIFIQUESE de la presente providencia por inserción en estados electrónicos de conformidad con el art. 201 del C.P.A.C.A. y por mensaje dirigido al correo electrónico de las partes y de acuerdo a lo señalado en los artículos 50² y 52³ de la Ley 2080 de 2021.

Para los anteriores efectos, los canales digitales de los sujetos procesales son los siguientes:

PARTE DEMANDANTE y su apoderada – preciadoabogados12@gmail.com

PARTE DEMANDADA:

1. AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI:

² Artículo 50. Modifíquese el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.

³ **Artículo 52.** Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.

buzonjudicial@ani.gov.co.

2. MINISTERIO DE TRANSPORTE:
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co

3. CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S.:
gdelatorre@uniondelsur.co; atencionalusuario@uniondelsur.co;
aortega@uniondelsur.co;

4. SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. lpellon@sacyr.com,
jmirat@sacyr.com

5. HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S.- HCC
COLOMBIA S.A.S.: dessalazar@panavial.com

6. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS: njudiciales@invias.gov.co;
rrevelo@invias.gov.co.

7. DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A. - DEVINAR S.A.:
contador@devinar.com; juridicapasto@devinar.com.

8. DEPARTAMENTO DE NARIÑO: notificaciones@narino.gov.co.

9. MUNICIPIO DE TANGUA: despachoalcaldía@tangua-narino.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: ipestrada@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO:
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCIA OJEDA INSUASTY
Magistrada

P/LA

Firmado Por:

**Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

0563c823b2f55c56f0106f1e6ec1d31219f0c9629cb931326a4e6efeb4d63a1e

Documento generado en 22/10/2021 03:49:28 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho - controversias contractuales
Radicación: 52001-23-33-000-2020-01131-00
Demandante: Soluciones Integrales de Oficina S.A.S.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P. y otros
Referencia: Auto que remite asunto por falta de jurisdicción.

Auto Interlocutorio N° D003-416-2021

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
SALA UNITARIA DE DECISIÓN**

MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY

Pasto, Nariño, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

I. ANTECEDENTES.

- En forma previa a proveer sobre la admisión de la demanda, el despacho requirió a CEDENAR S.A. E.S.P. allegar copia del contrato suscrito con la empresa OPEN SYSTEM COLOMBIA S.A.S., a fin de determinar si existía o no jurisdicción para conocer del asunto (archivo en PDF N° 0012)
- CEDENAR atendió el requerimiento y aportó la documentación solicitada, como puede observarse en la carpeta de archivos N° 0015 Respuesta CEDENAR – documento en PDF 15/“3. Contrato 328-2019 OPEN_Firmado (1)”.

II. CONSIDERACIONES

1. Del contenido del contrato celebrado entre CEDENAR E.S.P. y la Empresa OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.

Como ya se indicó, previo al estudio de la admisión de la demanda presentada por Soluciones Integrales de Oficina S.A.S., el Despacho consideró necesario contar con el contrato suscrito entre CEDENAR y OPEN SYSTEMS COLOMBIA, con el fin de establecer si esta jurisdicción puede conocer de este asunto.

CEDENAR S.A. E.S.P. allegó copia digital del contrato N° 328-2019, del que se destacan los siguientes aspectos:

- Se indica **que el contrato se rige por las normas del derecho privado**, según acuerdo de la Junta Directiva N° 006 de 11 de agosto de 2011 y las siguientes cláusulas:

- **El objeto del contrato es la implementación integral del sistema de información comercial (software)** ofertado por la empresa contratista, para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica a usuarios atendidos por CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. bajo la modalidad SaaS (Software como servicio, que incluye la carga de los datos transformados a las estructuras de aplicación contratada y adecuación funcional, el soporte, actualización y mantenimiento del producto según el alcance de la propuesta.
- La duración del contrato son 36 meses.
- El valor del contrato asciende a la suma de \$9.576.983.970, incluido IVA, que incluye los costos directos e indirectos en que incurra el contratista, específicamente: i) servicios de implementación; ii) servicio SaaS (software como servicio) y en los parágrafos de la cláusula tercera se especifica las condiciones que pueden producir la variación de esa suma.
- El pago del valor del contrato se pacta acorde al presupuesto del año 2019 y vigencias futuras: 2020, 2021 y 2022.
- En el alcance se indica que se incluyen los términos de referencia, oferta integral, en esta medida, el contratista debe desarrollar las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato en dicho marco, de igual forma, cita algunas especificaciones que deben cumplirse en el marco del contrato.
- En cuanto a los recursos se indica que el contratista debe proveer la infraestructura requerida para ejecutar el contrato, también se aclara que CEDENAR suministra oficina, equipos e inmuebles en la ciudad de Pasto.
- En la cláusula séptima, octava y novena se pactan las obligaciones de CEDENAR y la empresa contratista en el marco del contrato.
- Se designa un comité directivo que debe estar conformado por el equipo de CEDENAR, la interventoría y el Gerente del proyecto de la empresa contratista, quienes son responsables de la dirección, coordinación general y toma de decisiones durante la ejecución del contrato.
- Se estipula una cláusula penal para imputar el valor de los perjuicios que pudiera sufrir CEDENAR frente a un eventual incumplimiento del contrato.
- Se dispone como causales de terminación del contrato: i) expiración del plazo contractual; ii) por quiebra o insolvencia de una o ambas partes; iii) incumplimiento continuado de una de las partes del

contrato o incompetencia para desarrollarlo; iv) por incumplimiento de CEDENAR en los pagos superior a 90 días; v) por mutuo acuerdo.

- Se establece la independencia del contratista en el desarrollo del contrato, la exclusión de la relación laboral entre CEDENAR y el personal que ocupe la empresa contratista, así como la garantía de indemnidad de CEDENAR frente a reclamos de este tipo (laborales).
- Se estipula la garantía de propiedad y confidencialidad de todos los documentos producidos en el marco del contrato
- Se indica como lugar de ejecución del contrato las instalaciones de CEDENAR en esta ciudad, sin embargo, se aclara que una de las actividades del contrato debe desarrollarse en Cali.
- Se establece la obligación del contratista de constituir una garantía única de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones sociales.
- Se consagran cláusulas de autorización para tratamiento de datos, responsabilidad y condiciones para el tratamiento de datos y garantía de seguridad de aquellos (cláusulas 20 a 23)
- Se precisa que CEDENAR ejercerá la vigilancia del contrato, que los gastos de viaje están a cargo de la empresa contratista y se define los documentos que hacen parte del contrato
- Indica que el contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial.
- En la cláusula 28 se prevé que el contrato se suscribe y se interpreta para todos sus efectos bajo la Ley colombiana.
- Se prevén especificaciones en cuanto a formatos a entregar por parte de la empresa contratista, en qué condiciones puede modificarse el contrato (suscripción de OTRO SI), la dirección para notificaciones y comunicaciones y su perfeccionamiento.

Ahora bien, como se indicó en la providencia previa, se indicó que era necesario conocer el contrato a fin de establecer si se consagraron cláusulas exorbitantes, pues según lo reglado en el numeral 3 del artículo 104 del C.P.A.C.A., la jurisdicción contenciosa conoce de los asuntos relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.

En relación con las cláusulas exorbitantes, se tiene que se encuentran definidas en la Ley 80 de 1993. El Consejo de Estado, en sentencia del 24 de octubre de 2013¹, es ilustrativa al respecto, señalando lo siguiente:

Ahora bien, las cláusulas exorbitantes son -de acuerdo con la Ley 80 de 1993: la interpretación unilateral de los documentos contractuales y de las estipulaciones en ellos convenidas², la introducción de modificaciones a lo pactado³, la terminación unilateral⁴, la caducidad administrativa⁵, la reversión⁶ y el sometimiento a las leyes nacionales.

¹ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCION C - Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO - Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013) - Radicación número: 23001-23-31-000-2000-02857-01(24697) - Actor: DISLICORES COMERCIALIZADOR INTERNACIONAL Y OTRO - Demandado: DEPARTAMENTO DE CORDOBA - Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

² El artículo 15 de la Ley 80 de 1993, establece: "Art. 15. De la interpretación unilateral. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia."

³ El artículo 16 de la Ley 80 de 1993, establece: "Art. 16. De la modificación unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.

"Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo."

⁴ El artículo 17 de la Ley 80 de 1993, establece: "Art. 17. De la terminación unilateral. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:

"1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.

"2o. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista."

"3o. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.

"4o. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

"Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. de este artículo podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación.

"La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio."

⁵ El artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece: "Art. 18. De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

"En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.

"Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

"La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento."

⁶ El artículo 19 de la Ley 80 de 1993, establece: "Art. 19. De la reversión. En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna."

En este orden de ideas, las cláusulas exorbitantes le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo. Ahora bien, con la Ley 80 de 1993, su existencia opera tanto ex lege como ex contractu, dependiendo del acuerdo que se trate. En efecto, el artículo 14 de la norma en cita establece:

“Art. 14. De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: (...)

*“2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de **terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos** que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, **la prestación de servicios públicos** o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.*

*“Las entidades estatales **podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.***

“En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignent expresamente.

Que estos poderes operan ex lege significa que se integran a los contratos aun cuando no se pacten, porque la norma los incorpora directamente en algunos negocios, concretamente los que tienen por objeto: el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y los contratos de obra. En estos casos la norma es impositiva, al advertir que para el efectivo cumplimiento de los fines de la contratación las entidades “pactarán” estos poderes; no obstante, si no se estipulan, el inciso tercero del mismo numeral señala que se entienden pactadas aunque no se consignent expresamente...” (Negrillas propias).

En cuanto al sometimiento a las leyes nacionales, el Consejo de Estado⁷ ha precisado:

*“(...) **El sometimiento a las leyes nacionales.** Es mandato constitucional que las autoridades en un estado social de derecho estén sometidas al ordenamiento jurídico y es deber de los nacionales y extranjeros en*

⁷ Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil - Consejero Ponente: LUIS CAMILO OSORIO ISAZA - Bogotá, D.C, diciembre catorce del año dos mil (2000). Radicación número: 1293 - Actor: MINISTRO DEL INTERIOR - Referencia: Contrato estatal. Cláusulas excepcionales; límite temporal para su aplicación.

Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades (arts. 2º y 4º de la C.P.).

La inclusión del "sometimiento a las leyes nacionales", exigida a la actividad contractual de las entidades públicas, como lo prevé el artículo 14 de la ley de contratación estatal, constituye desarrollo de tales preceptos y del principio de legalidad a la que está sometida la administración pública y cumple una función integradora en cada contrato pero no puede considerarse cláusula ni estipulación, por no contener acuerdo a pesar de su calificación legal como tal, excepto lo previsto en los artículos 13 y 70 de la ley contractual.

El sometimiento a las leyes nacionales permite comprender que las entidades públicas, como autoridades estatales estén obligadas por el legislador a desarrollar conductas unilaterales en la relación contractual, que no son propiamente consideradas excepcionales o exorbitantes, pero sí extrañas a los contratos entre quienes son iguales ante la ley, esto es, los particulares, regulados en su negocio por las mismas normas, además tienen libre disposición patrimonial y en sus relaciones contractuales el Estado es un tercero, por ende, son ajenos a las leyes que regulan las actuaciones públicas.” (Negrillas propias).

Revisado el contrato suscrito entre OPEN SYSTEMS y CEDENAR, es claro al indicar que se aplicarán normas de derecho privado. De otra parte, se observa que no se previeron cláusulas exorbitantes en el contrato de acuerdo con la revisión expuesta en precedencia⁸.

Así mismo, revisada la solicitud pública de ofertas y la adenda N° 1 (páginas 16 a 39 y 67 – documento en PDF “0006CuadernoNo.4PruebasParte1”), tampoco se observa que se hayan previsto cláusulas exorbitantes que deban ser incluidas en el contrato posteriormente celebrado, en tanto los aspectos que allí se indican tienen que ver con lo siguiente:

- Objeto y alcance de la propuesta
- Etapas de implementación por parte del oferente
- Financiación y forma de pago
- Cronograma de la oferta
- Prórroga
- Inscripción de los oferentes
- Firma del contrato
- Entrega de la propuesta
- Validez de la oferta
- Contenido de la oferta económica – precios
- Requisitos habilitantes para que la oferta sea aceptada para su evaluación por CEDENAR
- Presentación de la aplicación (DEMO)

⁸ Se entiende que aunque en el contrato, se afirma que se someterá a la ley nacional, dicha cláusula no se puede comprender como exorbitante.

- Declaratoria de desierta
- Garantías
- Cómo se realizará la interventoría
- Adjudicación de la oferta
- Entrega de información básica por parte de CEDENAR al oferente elegido del sistema actual de información comercial
- Exigencia a los oferentes de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
- Responsabilidad de los oferentes frente a las dudas suscitadas respecto de la solicitud pública de ofertas realizada por CEDENAR.
- Plazo del contrato
- Cesión de derechos
- Indemnidad de CEDENAR frente a eventuales reclamos laborales derivados de la labor del contratista.
- En el capítulo II de la propuesta se hace referencia al alcance, metodología y especificaciones técnicas que debe tener el sistema comercial requerido por CEDENAR en la solicitud de ofertas.
- En el capítulo III se detalla cómo se realizara la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes a CEDENAR.
- La adenda N° 1 se refiere a las dudas presentadas por los oferentes en relación con la solicitud pública de ofertas, que son contestadas por CEDENAR. Las respuestas no prevén la inclusión de cláusulas exorbitantes en el contrato.

Ahora bien, el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 3° de la Ley 689 de 2001, dispone:

“(…) ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.

Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo.

PARÁGRAFO. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993.⁹ (Negrillas propias).

Y el párrafo del Artículo 80. de la Ley 143 de 1994¹⁰, contempla:

“(…) ARTÍCULO 80. Las empresas públicas que presten el servicio de electricidad al entrar en vigencia la presente Ley, en cualquiera de las actividades del sector, deben tener autonomía administrativa, patrimonial y presupuestaria.

Salvo disposición legal en contrario, los presupuestos de las entidades públicas del orden territorial serán aprobados por las correspondientes juntas directivas, sin que se requiera la participación de otras autoridades.

PARÁGRAFO. El régimen de contratación aplicable a estas empresas será el del derecho privado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en algunos de los contratos que celebren tales entidades. Cuando su inclusión sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.”

De acuerdo con las normas en cita, se desprende que las Leyes 142 y 143 de 1994 establecieron, como regla general, que los contratos que celebren las entidades prestadoras de servicios públicos se regirán, además de lo dispuesto

⁹ - Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación, Expediente No. 25000-23-26-000-2009-00131-01(42003) de 3 de septiembre 2020, C.P. Dr. Alberto Montaña Plata.

“(…) se extraen los siguientes puntos de unificación:

- Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios Públicos domiciliarios, deberá acudir a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo; si, con base en ello, no se desprende el conocimiento de esta jurisdicción, corresponderá a la jurisdicción ordinaria.

- Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos precontractuales de los prestadores de servicios Públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como, de resultar aplicables, por los principios que orientan la función administrativa.

- Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios Públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan a actos administrativos, deberán tramitarse a través de la acción (medio de control en el CPACA) de reparación directa.

- Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado la acción (medio de control) que corresponda, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de actos

¹⁰ por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética

por tales Leyes, por las normas del derecho privado, régimen contenido en estatutos como el Código Civil y el Código de Comercio.

De igual forma, en el art. 31 de la norma en cita se alude a la facultad que tienen las Comisiones de Regulación de hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes.

Así mismo, se establece la facultad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios, - se entiende que previa consulta a las Comisiones de Regulación -, de incluir tales cláusulas en los demás contratos y se consagra que, cuando la inclusión sea forzosa, rige lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

En cuanto a las Comisiones de Regulación se encuentra que el art. 69 de la Ley 142 de 1994 establece:

“ARTÍCULO 69. ORGANIZACIÓN Y NATURALEZA.. <sic> Créanse como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, y adscritas al respectivo ministerio, las siguientes comisiones de regulación:

69.1. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico.

69.2. Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

69.3. <Ver Notas de Vigencia> Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Comunicaciones.

PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible>¹¹ Cada comisión será competente para regular el servicio público respectivo.”

¹¹ Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1162-00 del 6 de septiembre del 2000, sólo en los términos de dicha providencia. Bajo cualquier otra interpretación dicho precepto se declara INEXEQUIBLE. Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. En torno a la interpretación de este artículo, la Corte Constitucional señaló en la sentencia en cita lo siguiente:

“(…) Por su parte, el inciso primero del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, acogiendo los anteriores criterios, señala que las comisiones tienen como fin promover la libre competencia y regular los monopolios, en orden a una prestación eficiente de los servicios. Por contera, las comisiones resultan ser tan sólo órganos especializados de carácter técnico encargados de contemplar en la órbita puramente administrativa, con arreglo a la ley y a los reglamentos y previa delegación del Presidente, las pautas orientadas a intervenir en los servicios públicos para preservar el equilibrio y la razonabilidad en la competencia y de esta forma asegurar la calidad de aquéllos y defender los derechos de los usuarios.

Señala la citada disposición legal:

“Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las Comisiones de Regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad (...).”

Los artículos indicados en precedencia establecen:

- Las Comisiones Reguladoras pueden hacer obligatoria en algunos contratos, la inclusión de cláusulas exorbitantes- **inclusión forzosa**-.
- Las Comisiones Reguladoras podrán facultar en los demás contratos, es decir que, en los que la inclusión no sea forzosa, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan cláusulas exorbitantes – **inclusión voluntaria**-.
- Sólo cuando la inclusión sea forzosa o se hayan incluido previa solicitud de la empresa, es que se habilita el control de dichos contratos a esta jurisdicción.

Es pertinente señalar que la normatividad no es clara al establecer cuándo es forzosa, la inclusión de cláusulas exorbitantes en los contratos celebrados por Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, es viable acudir en calidad de criterio orientador a la Ley 80 de 1993 – aunque como ya se advirtió, el contrato se rige por el Derecho Privado- y a la jurisprudencia, para determinar cuando se es forzosa la inclusión de cláusulas.

Así, la Ley 80 de 1993, reza:

“ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. *Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

1.

2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituyan monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.

De igual forma, el artículo 48 de la Ley 489 de 1998 ha establecido que las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios tienen la finalidad de "promover y garantizar la competencia entre quienes los presten".

En suma, el campo de la regulación debe restringirse al desarrollo, con arreglo a la ley, los reglamentos y las políticas gubernamentales, de las actividades de intervención y dirección técnica, en materias que, por involucrar intereses superiores, no se pueden abandonar al libre juego del mercado. De suerte que, en economías en las que aquél presenta más imperfecciones, se hace necesaria una mayor regulación; ésta se reconoce como indispensable, pero no como una modalidad de imposición al usuario ni para hacer más gravosas y difíciles sus condiciones ante quienes prestan los servicios públicos -sea el propio Estado o los particulares-, sino, al contrario, para promover las condiciones que faciliten la efectividad de sus derechos y garantías, la fijación de controles tarifarios y de calidad de los servicios, las reglas mínimas que deben observar los prestadores de los mismos y la introducción del equilibrio y la armonía en las actividades que, en competencia, adelantan las empresas, las que necesitan de una permanente función interventora del Estado.” (Destaca la Sala).

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de **prestación de servicios**.

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignent expresamente.

PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, **o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas**, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, **se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.**

Por su parte, la jurisprudencia ha señalado:

“Advierte la Sala que, en vigencia de la ley 80 de 1993, norma bajo la cual se suscribió el presente contrato, **existen tres grupos de contratos en torno a los cuales el régimen de dichos poderes exorbitantes es diferente.**

En el primer grupo se encuentran los contratos en los cuales las cláusulas excepcionales se tienen que pactar, es decir que son legalmente obligatorias, razón por la cual, su no se incluyen, se entienden pactadas, son las denominadas “cláusulas virtuales”. Los contratos que pertenecen a este grupo son: el de obra, los que tiene por objeto la explotación y concesión de bienes del Estado, la prestación de servicios públicos y las actividades que constituyen monopolio estatal. Al segundo grupo pertenecen los contratos en los cuales se encuentra prohibido pactar dichas cláusulas, de manera que, si se incluyen habrá nulidad absoluta de la cláusula. A este grupo pertenecen según el parágrafo del art. 14 de la ley 80 “...los contratos que se celebren con personas publicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento **y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2 de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales...” El tercer grupo lo integran en los cuales la ley autoriza, pero impone que las partes del negocio jurídico acuerden su inclusión; el pacto de tales cláusulas, en estos casos, es opcional, de manera que la falta de estipulación significa que los poderes exorbitantes no existen. Este grupo está integrado por los contrato de **prestación de servicios y suministro.** Es importante señalar, en este último grupo, aunque resulta obvio, que el acuerdo correspondiente sólo puede favorecer a las entidades estatales, es decir, que no es posible pactar tales poderes a favor del contratista.**

Sólo en estos dos tipos de contratos la ley autoriza a las partes del contrato a negociar la inclusión de los mismos, de manera que su existencia no deviene, en

forma “inmediata”, de la ley, como ocurre con el primer grupo de contratos, sino de manera “mediata”, porque si las partes no llegan a un acuerdo sobre dichos poderes, la ley no suple el vacío, y, por consiguiente, los mismos no existirían en el caso concreto. En esta posibilidad abre un espacio al principio de la autonomía de la voluntad, en un tema donde la tradición administrativa había entendido que exclusivamente la ley, no las partes del contrato, podía disponer la inclusión de las cláusulas exorbitantes, sin perjuicios de que el origen de las potestades propias de tales cláusulas provenga siempre de la ley, en unos casos, porque las impone y, en otras, porque simplemente la autoriza. En este contexto, y por exclusión, surge un cuarto grupo, constituido por todos aquellos negocios jurídicos que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. Tal es el contrato de consultoría, de comodato, de leasing, etc., los cuales no están incluidos en ninguno de los tres grupos a que alude expresamente la ley, de manera que, frente a ellos, es menester precisar el régimen a que deben sujetarse desde el punto de vista de las cláusulas excepcionales. Esta situación genera, necesariamente, el siguiente interrogante: ¿es posible pactar las cláusulas exorbitantes en los contratos que pertenecen a este grupo? Para la Sala la respuesta deber ser negativa, por las siguientes razones: De un lado, porque, como se ha visto, este tipo de poderes requiere, cuando menos, autorización legal para su inclusión y posterior utilización, debido a la naturaleza que tiene estas prerrogativas – por su carácter extraordinario e inusual, en relación con el derecho común, y de otro, porque el legislador es el único que puede disponer competencias para la expedición de actos administrativos en desarrollo de los contratos estatales, actos que, como es sabido, constituyen el mecanismo de ejercicio de las exorbitancias contractuales. De este modo en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada no es posible constituir este tipo de poderes, en contratos en los que la ley no ha impartido la autorización expresan o excluirlos en los que el legislador los ha previsto como obligatorios.” (expediente No. 25000-23-26-000-2001-01008-01 (30832) Demandante: Asesoramos S.C.A, demandado: Municipio de Gama)¹² (negritas y subrayas propias).

Ahora bien, de regreso al caso, se observa lo siguiente:

- a.- No se ha establecido que la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, acorde a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 142 de 1994 haya establecido la inclusión de cláusulas exorbitantes forzosa para el sub juez.
- b.- No se ha establecido que CEDENAR haya solicitado a la Comisión, la inclusión de cláusulas exorbitantes.
- c.- Si bien, se trata de una empresa de servicio público, lo cierto es que el contrato, no se suscribe para la prestación del mismo, según se desprende de su objeto, es más, puede afirmarse que se trata de un contrato para el desarrollo de una actividad tecnológica o incluso para la prestación de servicios.

Satura la conclusión de la Sala en lo que respecta al literal a, el pronunciamiento de que sobre este particular la CREG consignó en consulta radicada con el N° CREG-370 de 2002¹³, indicando lo siguiente:

¹² El Consejo de Estado, en providencia del 30 de noviembre de 2006.

¹³ Solicitante: ENERGUAVIARE S.A E.S.P. - Fecha: Bogotá D. C., 4 de febrero de 2002 - Radicación: CREG – 370 de 2002 Tema: Aplicación de las cláusulas exorbitantes. Respuesta: MMECREG – 0433 – 02 PROBLEMA: El solicitante pide a la Comisión información sobre la aplicación de las cláusulas exorbitantes de que trata el artículo 3° de la Ley 689 de 2001.

“(...) Aunque no se pone en duda la posibilidad legal de autorizar la inclusión de las mencionadas cláusulas exorbitantes en los contratos de las empresas prestadoras del servicio de electricidad, debe analizarse la conveniencia y el régimen jurídico-económico dentro del cual se realiza la prestación del servicio público domiciliario de electricidad, y en especial frente a lo relacionado con decisiones en materia de inversión:

En primer lugar, en cuanto se refiere de manera general a la prestación del servicio de electricidad, las Leyes 142 y 143 de 1994 establecieron que éste se rige por el principio de libre competencia entre los agentes que realizan las diferentes actividades propias de dicho servicio. La realización de ese principio, supone, en términos jurídicos, la igualdad en las normas jurídicas a las cuales deben sujetarse los agentes.

Las prerrogativas denominadas Cláusulas Exorbitantes, constituyen el rompimiento del principio de igualdad antes mencionado, y sobre el cual se fundamenta, además, el régimen de contratación entre agentes regidos por el derecho privado.

Esto pone en evidencia la inconveniencia de autorizar de manera general la inclusión de dichas cláusulas en los contratos que celebre una empresa prestadora de servicios públicos, ya que puede implicar, eventualmente, que una de las partes del contrato se encuentre en una situación ventajosa respecto a las demás empresas, al tener la posibilidad de dar aplicación a aquellas cláusulas consideradas en la Ley 80 de 1993, y que puede llegar a afectar el principio de libre competencia que corresponde promover, garantizar y preservar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Consideramos necesario señalar que no se pretende que se concluya que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ningún caso aplicará lo ordenado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 3o. de la Ley 689 de 2001.

Consideramos que el permitir la inclusión de este tipo de cláusulas es un asunto excepcional que se autorizará cuando las empresas solicitantes comprueben de manera fehaciente las siguientes circunstancias:

- ***Que los acuerdos que se pretende sean cobijados con este tipo de cláusulas **tengan relación directa con la prestación del servicio eléctrico a sus usuarios y que de no accederse a tal solicitud se ponga en peligro la continuidad y calidad en la prestación del mismo.*****
- ***Que **por no incluir este tipo de cláusulas se genere una parálisis o una afectación grave en la prestación de los servicios públicos que presta la empresa, tal como dispone el Artículo 14 de la ley 80 de 1993.*****

- **Que la normatividad privada no contemple mecanismos, o si los contempla son insuficientes o inaplicables, para que la empresa pueda incluir cláusulas que le garanticen la cumplida ejecución del contrato.**

Con la presente comunicación nos permitimos precisarle que la CREG, entiende que con la autorización de este tipo de cláusulas no se pretende “proteger los recursos de las empresas”, como lo manifiesta su comunicación; el objetivo va más allá, se busca proteger al usuario final para que obtenga una prestación confiable del servicio de electricidad, en otras palabras que prevalezca el interés general sobre el particular.”

Por otra parte, es necesario mencionar que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020¹⁴ señaló lo siguiente:

“(…) Unificación de jurisprudencia

1. De las razones que sirven de sustento para la decisión que se adoptará en esta sentencia, de conformidad con la solución del caso que precede, se extraen los siguientes puntos de unificación:

- *Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo; si, con base en ello, no se desprende el conocimiento de esta jurisdicción, corresponderá a la jurisdicción ordinaria...”*

De otra parte, también resulta ilustrativo aludir a lo dicho por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de septiembre de 2020¹⁵, en la cual negó el amparo del derecho de acceso a la administración de justicia por no remitir un asunto a la jurisdicción contenciosa, por cuanto versaba sobre un contrato suscrito por una empresa de servicios públicos domiciliarios en el que no se incluían

¹⁴ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA - Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020) - Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00131-01(42003) - Actor: VIGÍAS DE COLOMBIA SRL LIMITADA Y GRANADINA DE VIGILANCIA - Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Temas: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN – CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES – Cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las controversias de los prestadores de servicios públicos domiciliarios – Naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por prestadores de servicios públicos domiciliarios – Medio de control procedente para demandar actos precontractuales emitidos por prestadores de servicios públicos domiciliarios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

¹⁵ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA - Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ - Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00757-01(AC) - Actor: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. Demandado: SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - Temas: Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas/alcance - Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance - Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia - Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno.

cláusulas exorbitantes, en virtud de la regla señalada en el numeral 3 del art. 104 del C.P.A.C.A.:

*“(...) 65. En efecto, el numeral 3º. del artículo 104 de la Ley 1437, establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce los procesos relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, **siempre y cuando en estos se hayan incluido o deban incluirse cláusulas exorbitantes.***

66. Ahora bien, a efectos de la determinación de la competencia, le correspondía a la autoridad judicial establecer a partir de ciertos criterios, cuál era la jurisdicción que debía conocer el asunto. Para ello tuvo en consideración que en aplicación del principio de especialidad, normativa que sobre la materia establecen la Ley 57 de 15 de abril de 1887¹⁶ y la Ley 153 de 15 de agosto de 1887,¹⁷ cuando existan conflictos de interpretación de disposiciones jurídicas, la norma especial prima sobre la general.

*67. La decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el marco del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado por la jurisdicción civil y la administrativa, **se fundamentó en la especialidad que se predica del numeral 3º. del artículo 104 de la Ley 1437 relativa a que las controversias que se susciten en relación con los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, serán de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, siempre que en ellos se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.***

*68. En ese sentido, la Sala encuentra que para llegar a la conclusión según la cual la competencia del asunto recae, por mandato legal, en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, la autoridad demandada no dejó de aplicar la norma que correspondía, ni la aplicó de manera irracional o arbitraria. Lo anterior por cuanto, si bien, de conformidad con la norma que se dice desconocida, esto es el parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437, se entiende por entidad pública las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital, **lo cierto es que ese mismo artículo prevé una regla especial de competencia cuando de entidades de servicios públicos domiciliarios se trata, de forma que, al no cumplir con los elementos de la norma, esto es, que el contrato incluya cláusulas exorbitantes, le era imperioso concluir que, esta controversia no estaba atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa sino a la jurisdicción civil.***

*69. En efecto, el numeral 2º. del artículo 104 de la Ley 1437 no era la normativa aplicable al caso a efectos de dirimir el conflicto suscitado, toda vez que, independientemente de la participación del Estado en el capital de la empresa – criterio orgánico -, **lo cierto es que, la norma estableció una regla especial, cuando el objeto de la controversia tiene relación con contratos celebrados por una entidad prestadora de servicios públicos***

¹⁶ “Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”

¹⁷ “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”

domiciliarios, en la que exigió como requisito que se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes; regla que permite concluir que la norma general – la prevista en el numeral 2º. del artículo 104 de la Ley 1437 - se aplica a todos los campos con excepción de aquél que es regulado por la norma especial, – la prevista en el numeral 3º. del artículo 104 de la Ley 1437 -.

70. Lo anterior, en atención al carácter especial de la norma que, conforme con el numeral 1º. del artículo 5 de la Ley 57 de 15 de abril de 1887¹⁸, prima sobre la que tenga un contenido general.

71. Así lo ha recordado la Corte Constitucional en Sentencia C-078 de 1997¹⁹, al referirse a la aplicación preferente de las normas de contenido especial sobre las normas de contenido general. Esto dijo sobre el particular:

“[...] Ahora bien, con el objeto de contribuir a la solución de las contradicciones o antinomias que puedan presentarse entre las diferentes normas legales, las leyes 57 y 153 de 1887 fijaron diversos principios de interpretación de la ley, que en este caso pueden ser de recibo.

*Entre los principios contemplados por las dos leyes mencionadas se encuentra el de que cuando en los códigos adoptados se halle disposiciones incompatibles entre sí ‘**la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general**’ (numeral 1º del artículo 5º de la Ley 57 de 1887 [...])”*

72. En consecuencia, en consideración al objeto del litigio propuesto resulta evidente y razonable la conclusión a la que arribó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, que **la jurisdicción competente es la civil**, por cuanto en el contrato objeto del litigio no se incluyeron ni debieron incluirse cláusulas exorbitantes, como lo establecen los elementos normativos del numeral 3º. del artículo 104 de la Ley 1437.

73. De esta manera, la Sala concluye que la autoridad demanda **no incurrió en un defecto sustantivo** por falta de aplicación de la norma jurídica contenida en el párrafo del artículo 104 de la Ley 1437, puesto que no se advierte un análisis irracional o caprichoso de las normas jurídicas en cuestión y, por el contrario, la decisión estuvo conforme con el marco constitucional y legal existente, toda vez que, realizó el análisis de la norma que se echa de menos, conforme con la interpretación que debió hacer de los numerales 2º. y 3º. del artículo 104 de la Ley 1437(...).” (Negrillas propias).

De acuerdo a la jurisprudencia expuesta queda claro entonces que la jurisdicción contenciosa solo conoce de los asuntos relacionados con controversias sobre contratos que celebren las empresas de servicios públicos domiciliarios únicamente en el evento de la inclusión de cláusulas exorbitantes en los mismos o que debieron incluirse.

¹⁸ “Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”.

¹⁹ Corte Constitucional, Sentencia C-078 de 20 de febrero de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Por lo expuesto, es del caso aplicar el art. 16 del C.G.P. en concordancia al artículo 138 de la misma obra, conforme a los cuales, la falta de jurisdicción por el factor funcional conserva la validez de las actuaciones surtidas, debiéndose enviar el proceso de inmediato al juez competente.

Acerca de este último punto, se tiene que de conformidad con el artículo 20 del C.G.P. numeral 11, será competente el Juez Civil de Circuito en primera instancia, de los asuntos que no estén atribuidos a otro juez.

En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Nariño,

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR FALTA DE JURISDICCIÓN para conocer el presente asunto, y en consecuencia **REMITIR** el proceso con destino a la Oficina Judicial, para que sea sometido a reparto entre los Juzgados Civiles del Circuito de Pasto (Nariño).

SEGUNDO.- En caso de no aceptarse lo anterior, **desde ya se propone conflicto negativo de competencias.**

TERCERO.- Notifíquese a los sujetos procesales de conformidad con el art. 201 del C.P.A.C.A. y por mensaje dirigido al correo electrónico de las partes y de acuerdo a lo señalado en los artículos 50²⁰ y 52²¹ de la Ley 2080 de 2021.

Para los anteriores efectos, los canales digitales de los sujetos procesales son los siguientes:

PARTE DEMANDANTE: Soluciones integrales de Oficina:
juridico@sio.com.co gustavogarcia083@gmail.com

PARTE DEMANDADA:

CEDENAR S.A. E.S.P. – notificacionjudicial@cedenar.com.co

MINISTERIO DE HACIENDA:
notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co

²⁰ Artículo 50. Modifíquese el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.

²¹ **Artículo 52.** Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA: notijudiciales@minenergia.gov.co

IPSE: juridica@ipse.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: ipestrada@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO:
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

CUARTO.- En firme, se archivará el expediente.

QUINTO.- Realícense las anotaciones pertinentes en el sistema judicial *Siglo XXI* a través de secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

P/LA

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

137107b9b8279420dbf58bfaa6c0c5b548867527fb8a31d3f7dac7fe8e57b4a1

Documento generado en 22/10/2021 03:49:31 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN**

MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY

Pasto, Nariño, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52-001-23-33-000-2020-01174-00
Demandante: Martha Viviana Estrada
Demandado: Centro Hospital Señor de la Divina Misericordia de Puerres E.S.E.
Referencia: **Auto que remite por competencia el asunto por el factor cuantía, a los Juzgados Administrativos del Circuito de Pasto.**

Auto Interlocutorio N° D003 -179-2020

CONSIDERACIONES

1. Corrección de la demanda

Mediante auto publicado en estados y notificado debidamente a la parte demandante¹, este despacho inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora corrija los defectos señalados en el término de 10 días². Para tal efecto debía corregir la cuantía, atendiendo a las previsiones establecidas en el art. 157 del C.P.A.C.A., determinando cuál era el valor de la pretensión mayor, que además debía estimarse al tiempo de la demanda, sin incluir frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a su presentación.

El apoderado judicial de la parte actora envió escrito al buzón electrónico del despacho, el 11 de marzo de 2021 (documento en PDF "011 Corrección de la demanda"), es decir, dentro del término legal establecido para el efecto, atendiendo la observación realizada por el despacho en relación con la cuantía.

Teniendo en cuenta que en el asunto se encuentra pendiente emitir decisión sobre la admisión de la demanda, la Sala estima pertinente establecer inicialmente, si esta Corporación es competente para asumir el estudio del asunto, según los argumentos que se exponen a continuación:

2. Competencia por el factor cuantía.

La Competencia en materia contenciosa se determina por varios aspectos, que han sido analizados por el Consejo de Estado, en abundante jurisprudencia sobre la materia, uno de ellos es la cuantía de la pretensión. Así, en la sentencia de fecha 29 de agosto de 2007³, manifestó lo siguiente al respecto:

¹ Documentos en PDF "008 Auto inadmite demanda"; "009 Estados 10-03-21" y "010 Notificación auto inadmite demanda"

² Los cuales se contabilizan desde el 11 hasta el 25 de marzo de 2021.

³ N° de radicación 25000-23-26-000-1995-00670-01(15526).

“La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la competencia como la facultad que tiene un juez para ejercer, por autoridad de la ley y en determinado asunto, la jurisdicción que corresponde a la República⁴ o como la medida con base en la cual se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades que la integran y cuya determinación atiende a factores universales que garantizan que el asunto debatido será conocido por el juez más cercano a quienes aspiran a obtener un pronunciamiento de la Rama Judicial del Poder Público⁵.

*Tales factores guardan relación con la naturaleza del proceso y la **cuantía de la pretensión —objetivo—**; la calidad de las personas que han de ser partes dentro de la litis —subjetivo—; la distribución de los asuntos entre las diferentes jerarquías de funcionarios dentro de la jurisdicción, como corolario del principio de la doble instancia —funcional—; el reparto de los negocios atendiendo al lugar geográfico dentro del cual el juez o tribunal tiene atribuida la *iuris dictio* —territorial— o la acumulación de una pretensión a otra, cuando entre ellas existe conexión y un juez que en principio carece de competencia para conocer alguna de las acumuladas, puede asumir la obligación de decidir respecto de todas por ser legalmente competente para resolver una de las reclamaciones formuladas —conexión—.”*

En el aspecto específico de la determinación de la competencia para conocer de un asunto por el factor cuantía, el artículo 152 de la ley 1437 de 2011⁶, dispone lo siguiente:

“ART. 152.- Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho **de carácter laboral** que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, **cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.** (...) (Negrillas fuera del texto original).

Por otra parte, el artículo 155 del C.P.A.C.A.⁷, establece que los jueces administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, **“2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”** (Destaca la Sala).

Teniendo en cuenta las normas antes referidas, se tiene que los Tribunales Administrativos son competentes para conocer sobre asuntos de carácter laboral en primera instancia, cuando la cuantía **exceda** los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que los jueces administrativos conocen de aquellos, cuando la cuantía **no exceda** dicho valor.

Ahora bien, en el caso objeto de estudio, el valor de la cuantía se calcula en la suma de **\$18.041.895**, valor que deduce de la liquidación de los últimos tres (3) años de las pretensiones de auxilio de transporte, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, compensación por vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad (páginas 23 y 24 – documento en PDF “011 Corrección de la demanda”).

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de quince (15) de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991); Consejero Ponente: Rodrigo Vieira Puerta; Radicación número: 1170.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de marzo treinta (30) de dos mil uno (2001); Consejero ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié; Radicación número: 25000-23-27-000-2000-0668-01(11687).

⁶ Es de anotar que la modificación en cuanto a las competencias introducida por la Ley 2080 de 2021, rige a partir del próximo año, conforme lo dispuesto en el art. 86 de la norma en cita.

⁷ *Ibidem*

Como se observa, la suma en comento es inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes⁸, razón por la cual es claro que esta Corporación carece de competencia para conocer del asunto en primera instancia, por el factor de la cuantía.

En vista de lo anterior, concluye la Sala que es del caso declararse sin competencia por el factor cuantía para conocer del presente asunto, y ordenar su remisión al funcionario competente, que según el artículo 156 numeral 3 del C.P.A.C.A, son los Juzgados Administrativos del Circuito de Pasto (R), teniendo en cuenta que se trata de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y según los documentos allegados al plenario, la demandante prestó sus servicios en el Centro de Salud de Puerres E.S.E. (páginas 28 y siguientes - documento en PDF "011 Corrección de la demanda").

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño, en Sala Unitaria de Decisión,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR la falta de competencia por el factor cuantía para conocer del presente asunto.

SEGUNDO.- En firme, procédase a la inmediata remisión del asunto a los Juzgados Administrativos del Circuito de Pasto (Reparto), por intermedio de la Oficina Judicial.

TERCERO.- Notifíquese de la presente providencia por inserción en estados electrónicos de conformidad con el art. 201 del C.P.A.C.A. y por mensaje dirigido al correo electrónico del apoderado de la parte demandante y de acuerdo a lo señalado en los artículos 50⁹ y 52¹⁰ de la Ley 2080 de 2021.

CORREO ELECTRONICO PARTE DEMANDANTE victorquijano51@hotmail.com

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

P/LA

⁸ Realizado el cálculo de la cuantía con el salario mínimo del 2020 (\$877.803), se tiene que 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalen a la suma de \$43.890.150

⁹ Artículo 50. Modifíquese el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.

¹⁰ **Artículo 52.** Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f84b6be39607194483b4859e2ed2f026a6d7d8dd4910f543daf7a00bb872e41**
Documento generado en 24/10/2021 02:35:00 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Medio de control: Ejecutivo
Radicación: 52-001-33-33-003-2017-00162-00.
Interno: 5300
Demandante: José del Cristo Cepeda Mesa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Referencia: No resuelve recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago, devuelve a primera instancia.

Auto interlocutorio N° D003-414-2021

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
SALA UNITARIA DE DECISIÓN**

MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY

San Juan de Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

I. Asunto

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de reposición que el apoderado de la parte demandada – UGPP, presentó contra el auto que libró mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia.

II. Antecedentes.

- El señor José Cepeda Mesa, actuando a nombre propio presentó demanda ejecutiva en contra de la UGPP solicitando que se libere mandamiento de pago por las sumas ordenadas en la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto el 11 de mayo de 2012, confirmada en segunda instancia por esta Corporación, mediante sentencia del 21 de febrero de 2014 (páginas 3 a 9 – archivo PDF N° 1).
- El asunto fue inicialmente asignado al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto, el cual lo remitió por competencia al Juzgado Tercero Administrativo al ser el despacho que profirió la sentencia cuya ejecución se solicita (páginas 77 a 80 – archivo PDF N° 1).
- El Juzgado Tercero Administrativo de Pasto se abstuvo de librar mandamiento de pago, al considerar que i) las providencias judiciales cuya ejecución se pide contenían obligaciones de hacer y no de pago; ii) se debió solicitar librar mandamiento de pago por obligación de hacer para ordenar el

cumplimiento de la orden impartida en la sentencia; iii) se presentó indebida acumulación de pretensiones (páginas 89 a 93 – archivo PDF N° 1).

- La parte ejecutante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión anterior (páginas 95 a 103 – archivo PDF N° 1). El *A quo* confirmó la decisión recurrida y concedió la alzada ante el superior (páginas 107 a 109 – archivo PDF N° 1)
- Esta Corporación confirmó el auto apelado (páginas 116 a 136– archivo PDF N° 1). La parte ejecutante solicitó aclaración y complementación de la providencia anterior (páginas 141 a 148 – archivo PDF N° 1), petición que fue negada por este Tribunal (páginas 152 a 155 – archivo PDF N° 1). Por su parte, el juzgado de origen profirió auto de obediencia (página 160 – archivo PDF N° 1).
- La parte ejecutante presentó acción de tutela contra esta Corporación ante la decisión de confirmar el auto que se abstuvo de librar mandamiento de pago, misma que fue resuelta a su favor en virtud de sentencia del Consejo de Estado proferida dentro del proceso 2019-01636 (páginas 172 a 204 – archivo PDF N° 1).
- En cumplimiento de la providencia anterior, el despacho profirió auto en virtud del cual libró mandamiento de pago en contra de la UGPP a favor de la parte demandante (páginas 207 a 223 – archivo PDF N° 1).
- La providencia en comento se notificó a las partes el 17 de enero de 2020¹ (páginas 226 y 227 archivo PDF N° 1).
- El apoderado de la UGPP presentó recurso de reposición frente al auto que libró mandamiento de pago, mediante escrito radicado en la Secretaría del Tribunal el 22 de enero de 2020 (páginas 247 a 252 archivo PDF N° 1).
- La Secretaría de esta Corporación corrió traslado del recurso presentado el 27 de enero de esa anualidad, desde el 28 hasta el 30 de enero de 2020 (página 253 - archivo PDF N° 1).
- La parte demandada no realizó pronunciamiento sobre el recurso presentado por el apoderado de la UGPP.
- En escrito aparte, la UGPP propuso excepciones de mérito con ocasión de la demanda ejecutiva presentada (páginas 256 a 260 archivo PDF N° 1).

¹ Cabe anotar que se había efectuado notificación el 16 de diciembre de 2019, pero la UGPP argumentó que no se había efectuado notificación adjuntando copia de la demanda, conforme a las previsiones del art. 612 del C.G.P. (página 228), por lo que la Secretaría de la Corporación procedió a efectuar lo pertinente, realizando nuevamente la notificación el 17 de enero de 2020.

- Con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020², PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020³, PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020⁴, PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020⁵, PCSJA2011546 de 25 de abril de 2020⁶, PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020⁷ y PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020⁸ y PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020⁹ en virtud de los cuales los términos judiciales se suspendieron entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, salvo algunas excepciones.
- Mediante Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, también se dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.
- La digitalización del expediente se realizó por parte del Despacho, con las limitaciones técnicas (falta de equipos), escasez de personal y ante las dificultades presentadas con la empresa designada por la Rama Judicial para el escaneo de expedientes. Puede consultarse en el siguiente enlace: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des03tanarino_cendoj_ramajudicial_gov_co/EvHnnM2CX1plqUPxUMUDQWcB9SAPE4ezYok8hfWWWQ5DEw?e=bs8kKD

3.1. Decisión del recurso de reposición.

Considera la Sala que el recurso de reposición, debe ser tramitado y resuelto por la primera instancia, toda vez que, si bien este despacho libró mandamiento de pago, lo hizo en razón del fallo de tutela y actuando como juez de segunda instancia, así las cosas, una vez emitida la providencia ya mencionada, el proceso debe regresar al Juzgado Tercero Contencioso Administrativo del Circuito de Pasto que tiene a su

² Suspende términos desde el 16 hasta el 20 de marzo de 2020, con las excepciones allí señaladas. No contempla en las excepciones a la suspensión, a los procesos electorales.

³ Suspende términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020, con las excepciones allí señaladas. No contempla en las excepciones a la suspensión, a los procesos electorales.

⁴ Suspende términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020, con las excepciones allí señaladas. No contempla en las excepciones a la suspensión, a los procesos electorales.

⁵ Suspende términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020, con las excepciones allí señaladas. No contempla en las excepciones a la suspensión, a los procesos electorales.

⁶ Suspende términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020, con las excepciones allí señaladas. No contempla en las excepciones a la suspensión, a los procesos electorales.

⁷ Suspende términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020, con las excepciones allí señaladas. No contempla en las excepciones a la suspensión, a los procesos electorales.

⁸ Suspende términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020, con las excepciones allí señaladas. No contempla en las excepciones a la suspensión, a los procesos electorales.

⁹ Suspende términos desde el 9 hasta el 30 de junio de 2020, con las excepciones allí señaladas. No contempla en las excepciones a la suspensión, a los procesos electorales.

cargo el asunto y no en este despacho que solo conoce del mismo en virtud de las apelaciones que se puedan surtir.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño, en Sala Unitaria de Decisión,

RESUELVE

PRIMERO.- En firme esta providencia, remítase en forma inmediata el expediente al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto para que continúe el trámite del proceso ejecutivo en primera instancia.

SEGUNDO.- Notifíquese de la presente providencia por inserción en estados electrónicos de conformidad con el art. 201 del C.P.A.C.A. y por mensaje dirigido al correo electrónico de las partes:

- **Parte demandante:** jose.cepedamesa@gmail.com
- **Parte demandada:** oscarf.ruanob@gmail.com;
notificaciones.judicialesugpp@ugpp.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCIA OJEDA INSUASTY
Magistrada

P/LA

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

3ebcfab8d2c6eb8a02d93d2454c4a3d2e3d1f53b2d963f2201557316e03d0843

Documento generado en 22/10/2021 03:49:39 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA
OJEDA INSUASTY

Pasto, veintiuno (21) de octubre de dos mil
veintiuno (2021).

Medio de control: Reparación directa
Radicado: 520013333007 –2017 –00140-00
Número interno: (9897).
Demandante: Bladimiro Bados Rosero y otros.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación –
Rama Judicial – Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación
contra sentencia de primera instancia.

Auto No. D003-402-2021

I. Asunto.

La Sala se pronuncia sobre la admisión al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El día 9 de marzo de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto accedió a las pretensiones de la

demanda, condenando a la Fiscalía General de la Nación¹. El fallo les fue notificado personalmente a las partes el 10 de marzo de 2021 (PDF 46).

- Inconforme con lo adoptado, el 24 de marzo de 2021, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en contra del citado fallo (PDF 47).

El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020² y 637 del 6 de mayo de 2020³, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁴.

III. Consideraciones.

¹ PDF 45

² Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁴ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA2011546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encontrándose el asunto pendiente de que se resuelva sobre la admisión al recurso de alzada, resulta necesario traer las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamenta el trámite de apelación en contra de sentencias bajo los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).*

Por otra parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y que, en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia de aquellos procesos iniciados en trámite de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de

la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En tal sentido, debe analizarse el momento en el que se notificó la providencia y se interpuso el recurso, para establecer, desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto, profirió fallo declarando responsable a la Fiscalía General de la Nación por los cargos acusados, la notificación fue realizada el día **10 de marzo de 2021**, es decir, en vigencia de la reforma introducida con la Ley 2080 de 2021.

De otro lado, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación el día **24 de marzo de 2021**, actuación realizada dentro de términos⁵.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la **Fiscalía General de la Nación**.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO: CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO: Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty

⁵ El término transcurrió entre los días **11 y 25 de marzo de 2021** (Art. 203 del CPACA).

**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**6fe4673a41ffe2eb049ffaa4f3da01b5e39695da7b4c319d6c5cc1fb
dab72f0a**

Documento generado en 22/10/2021 03:49:42 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA OJEDA
INSUASTY

Pasto, veintiuno (21) de octubre de dos mil
veintiuno (2021).

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicado: 52001-2333-008 –2017 –00037-00

Número interno: (9927).

Demandante: Cesar Aureliano Acosta

Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.

Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación contra sentencia de primera instancia.

Auto No. **D003-403-2021**

I. Asunto.

Se pronuncia la Sala sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El día 27 de julio de 2020, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto accedió a las pretensiones de la demanda y

condenando a CASUR¹ al cumplimiento del fallo. La providencia fue notificada personalmente a las partes el 30 de julio de 2020 (PDF 17).

- El 13 de agosto de 2020, el apoderado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional interpuso recurso de apelación (PDF 18).
- El 16 de marzo de 2021, se convocó a la celebración de la diligencia prevista en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011². La cual aconteció el 25 de marzo de 2021 (PDF 24).

III. Consideraciones.

El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020³ y 637 del 6 de mayo de 2020⁴, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios Decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁵.

¹ PDF 16

² PDF 19 Y 20

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

⁴ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁵ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.

Encantándose el asunto pendiente de proveer sobre la admisión del recurso de alzada, interpuesto contra la sentencia de primera instancia resulta necesario considerar lo siguiente:

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y que, en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para aquellos procesos iniciados en trámite anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales

-
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
 - Acuerdo PCSJA2011546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
 - Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
 - Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En tal sentido, debe analizarse el momento en el que se notificó la providencia y se interpuso el recurso, para establecer, desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, profirió fallo en primera instancia mediante el cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, condenando a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional al restablecimiento de los derechos deprecados. La notificación de la decisión se realizó el día **30 de julio de 2020**, es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021.

Por su parte, CASUR interpuso recurso de apelación el 13 de agosto de 2020 y el 25 de marzo de 2021 fracasó la diligencia conciliatoria prevista en el artículo 192 del CPACA. Es decir, impugnó dentro de términos⁶.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR**.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO: CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO: Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

⁶ El término transcurrió entre los días **31 de julio y 14 de agosto de 2020** – es decir, durante diez (10) días según prevé el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

95c6c316080323ff6fb4d878e7247c064209908af937d20c7481dec
160ce339a

Documento generado en 22/10/2021 03:49:45 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO**

**MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA OJEDA
INSUASTY**

Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil
veintiuno (2021).

Medio de control: Nulidad y restablecimiento
del derecho.

Radicado: 520013333007 –2019-00107-00

Número interno: (9928).

Demandante: Elber Darío Jiménez Eraso.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional.

Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación contra
sentencia de primera instancia.

Auto No. **D003-406-2021**

I. Asunto.

Procede a pronunciarse la Sala sobre la admisión al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El día 24 de marzo de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto negó las pretensiones de la demanda¹. El fallo les fue notificado personalmente a las partes el 25 de marzo de 2021 (PDF 14).
- El 7 de abril de 2021, la apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación (PDF 15 y 16).

El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020² y 637 del 6 de mayo de 2020³, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁴.

¹ PDF 13

² Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁴ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

III. Consideraciones.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encontrándose el asunto pendiente de proveer acerca de la admisión al recurso de alzada, se hace indispensable traer a colación las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).*

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y el cual en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para los procesos iniciados en trámite anterior de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En tal sentido, debe analizarse el momento en el que se notificó la providencia y se interpuso el recurso, para establecer desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto, negó las pretensiones de la demanda el 24 de marzo de 2021, y notificó personalmente a las partes de la decisión al día siguiente **–25 de marzo de 2021–**, es decir, en vigencia de la reforma de la Ley 2080 de 2021.

Por su parte, la apoderada de la parte demandante, allegó recurso de apelación mediante correo con data del **7 de abril de 2021**, actuación realizada dentro de términos⁵.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la **parte demandante**.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO: CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO: Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty

⁵ El término transcurrió entre los días **26 de marzo y 15 de abril de 2021**(Art. 203 del CPACA).

**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**1fada295d07dc1a769b9b61c1cfe8a07578c9b9132e9fe1bd507f0ff
fc09ea1b**

Documento generado en 22/10/2021 03:49:48 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO MAGISTRADA PONENTE: SANDRA
LUCÍA OJEDA INSUASTY**

Pasto, veintidós de octubre de dos mil
veintiuno (2021).

Medio de control: Reparación directa.
Radicado: **52-001-33-33-005-2019-00183.**
Número interno: (9964).
Demandante: Anderson José Burbano Muñoz y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación contra sentencia de primera instancia.

Auto No. **D003-407-2021**

I. Asunto.

Procede la Sala a pronunciarse sobre la admisión al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El 15 de marzo de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto accedió a las pretensiones de la demanda¹, y

¹ PDF 42

condenó al Ejército Nacional. La decisión fue notificada personalmente a las partes el 17 de marzo de 2021 (PDF 43).

- Inconforme con la decisión adoptada, la apoderada del Ejército Nacional presentó por correo electrónico cuya remisión data del 5 de abril de 2021, escrito de impugnación en contra del citado fallo (PDF 44 y 45).
- El 23 de abril de 2021, la judicatura concedió el recurso de alzada (PDF 48).

El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020² y 637 del 6 de mayo de 2020³, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁴.

² Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁴ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

III. Consideraciones.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encantándose el asunto pendiente de proveer acerca de la admisión al recurso de alzada, se hace indispensable traer a colación las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).*

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y el cual en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para los procesos iniciados en trámite anterior de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En tal sentido, debe analizarse el momento en el que se interpuso el recurso y se notificó la providencia, para establecer desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó al Ejército Nacional mediante fallo calendarado al 15 de marzo de 2021, que fue notificado

personalmente a las partes el día **17 de marzo de 2021**, esto en vigencia de la reforma que introdujo la Ley 2080 de 2021.

Por su parte, la apoderada de la parte demandada, presentó recurso de apelación mediante correo que data del **5 de abril de 2021**, actuación realizada dentro de términos⁵.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el **EJERCITO NACIONAL**.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO: CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO: Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

⁵ El término transcurrió entre los días **18 de marzo y 8 de abril de 2021** (art. 243 del CPACA).

Firmado Por:

**Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**53c27369563d4708b6a3c1249bd68960ff75ecd9eb5049c76380ea
5ac8c5044f**

Documento generado en 22/10/2021 03:49:51 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO MAGISTRADA PONENTE: SANDRA
LUCÍA OJEDA INSUASTY**

Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil
veintiuno (2021).

Medio de control: Reparación directa.
Radicado: **52-001-33-33-008-2017-00262-00.**
Número interno: (9999).
Demandante: Sofía Suarez de Benavides.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación contra sentencia de primera instancia.

Auto No. **D-003-408-2021**

I. Asunto.

La Sala se pronuncia sobre la admisión al recurso de apelación, interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El 23 de febrero de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, en desarrollo de la diligencia de Audiencia inicial profirió sentencia negando las pretensiones de la

demanda e imponiendo condena en costas a la parte demandante¹.

- La decisión fue notificada en estrados, y la apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación en la diligencia, igualmente sustento la impugnación mediante escrito que fue presentado el 4 de marzo DE 2021 al buzón electrónico del despacho (PDF 17).
- Mediante auto que data del 30 de abril de 2021, la judicatura concedió el recurso de alzada y dispuso la remisión del expediente (PDF 18 y 19).

El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020² y 637 del 6 de mayo de 2020³, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁴.

¹ PDF 16.

² Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁴ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA2011546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de

III. Consideraciones.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encantándose el asunto pendiente de proveer acerca de la admisión al recurso de alzada, torna indispensable traer a colación las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y el cual en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para los procesos iniciados en trámite anterior de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales

mayo de 2020.

- Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En tal sentido, debe analizarse el momento en el cual se notificó la providencia y se presentó el recurso, para establecer desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Octavo Administrativo de Pasto negó a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante a través de fallo dictado en audiencia inicial que aconteció el **23 de febrero de 2021**, esto en vigencia de la reforma que introdujo la Ley 2080 de 2021.

Por su parte, la apoderada de la parte demandante fue notificada en estrados de la decisión adoptada por lo cual interpuso recurso de apelación en el desarrollo de la diligencia. Igualmente sustentó la impugnación mediante escrito presentado el **4 de marzo de 2021**⁵, dentro de términos.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la **PARTE DEMANDANTE**.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO: CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO: Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

⁵ El término transcurrió entre los días **24 de febrero y 9 de marzo de 2021**, en consideración al término de diez (10) previsto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

6043e438879773069b6881b8578f3f2033b7797cc678d0fe211729a
32a748202

Documento generado en 22/10/2021 03:49:04 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO MAGISTRADA PONENTE: SANDRA
LUCÍA OJEDA INSUASTY**

Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil
veintiuno (2021).

Medio de control: Reparación directa.
Radicado: 52001-33-33-004-2016-00273-00.
Número interno: (10007).
Demandante: Neri Oliva Villota y otros.
Demandado: Municipio de Pasto.
Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación
contra sentencia de primera instancia.

Auto No. D003-409-2021

I. Asunto.

Se pronuncia la Sala sobre la admisión al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El 27 de enero de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda¹, condenó al Municipio de Pasto al cumplimiento

¹ PDF 75

de la sentencia y absolvió a las entidades llamadas en garantía. La decisión fue notificada personalmente a las partes mediante correo que data al 1 de febrero de 2021 (PDF 76).

- Inconforme con lo adoptado, el Municipio de Pasto mediante escrito presentado por su apoderado judicial el día 15 de febrero de 2021 impugnó la decisión (PDF 77 y 78).
- El 9 de marzo de 2021, la judicatura concedió el recurso de alzada y en consecuencia dispuso la remisión del expediente (PDF 81, 82, y 83).

El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020² y 637 del 6 de mayo de 2020³, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁴.

² Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁴ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también

III. Consideraciones.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encontrándose el asunto pendiente de resolver acerca de la admisión al recurso de alzada, es indispensable traer a presente las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).*

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y el cual en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para los procesos iniciados en trámite anterior de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En este sentido, debe analizarse el momento en el cual se notificó la providencia, y se interpuso el recurso, para establecer desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, condenó al Municipio de Pasto y eximió de responsabilidad a los llamados en garantía mediante fallo

calendado al 27 de enero de 2021. El fallo fue notificado personalmente a las partes el día **1 de febrero de 2021**, esto en vigencia de la reforma que introdujo la Ley 2080 de 2021.

Por su parte, el apoderado del Municipio de Pasto, presentó recurso de apelación mediante correo que data del **15 de febrero de 2021**, actuación realizada dentro de términos⁵.

El apoderado de la parte demandante presentó apelación el 15 de febrero de 2021 (PDF 78).

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el **MUNICIPIO DE PASTO Y LA PARTE DEMANDANTE**.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO: CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO: Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

⁵ El término transcurrió entre los días **2 y 15 de febrero de 2021** (art. 243 CPACA)

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

ca7f11ddb2cb90cacdd905185326574c089b5511e37f579acd0027
605d2d96f4

Documento generado en 22/10/2021 03:49:08 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA
OJEDA INSUASTY

Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno
(2021).

Medio de control: Controversias contractuales.
Radicado: 52-001-33-33-005-2019-00148.
Número interno: (10029).
Demandante: Carrocerías el Sol S.A.S.
Demandado: Municipio de Ipiales.
Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación
contra sentencia de primera instancia.

Auto No. D-003-410-2021

I. Asunto.

Se pronuncia la Sala respecto a la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El 23 de marzo de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto accedió parcialmente a las pretensiones de

la demanda¹. La decisión fue notificada personalmente a las partes mediante correo dirigido a sus buzones que data al 26 de marzo de 2021 (PDF 54).

- Inconforme con lo adoptado, la parte demandante presentó escrito de apelación el día 13 de abril de 2021 (PDF 55 y 56).
- Por otra parte, el Municipio de Ipiales impugnó la decisión mediante la presentación de escrito de apelación con escrito presentado al buzón del despacho el 16 de abril (PDF 57 y 58).
- El 10 de mayo de 2021, la judicatura concedió el recurso de alzada y en consecuencia dispuso la remisión del expediente (PDF 59).
- El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020² y 637 del 6 de mayo de 2020³, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁴.

¹ PDF 53

² Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁴ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA2011546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta

III. Consideraciones.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encontrándose el asunto pendiente de resolver acerca de la admisión al recurso de alzada, es indispensable traer a presente las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y el cual en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para los procesos iniciados en trámite anterior de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que

el 10 de mayo de 2020.

- Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se registrarán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En este sentido, debe analizarse el momento en el cual se notificó la providencia, y se interpuso el recurso, para establecer desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda mediante fallo calificado al 27 de enero de 2021. El fallo en cita, les fue notificado personalmente a las partes el día **26 de marzo de 2021**, esto en vigencia de la reforma que introdujo la Ley 2080 de 2021.

Al respecto, se tiene que las partes del proceso impugnaron el fallo de primera instancia. La parte demandante lo hizo mediante escrito presentado el **13 de abril**. Actuación realizada dentro de términos de términos⁵.

Por otro lado, el Municipio de Ipiales, obrando como entidad demandada, presentó su escrito el día **16 de abril de 2021**. Es decir, dentro de término.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el **DEMANDANTE y EL MUNICIPIO DE IPIALES**.

SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO.- CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

⁵ El término transcurrió entre los días **5 de abril y 16 de abril de 2021** (art. 243 CPACA).

CUARTO.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

6fee020f3f7e14742274335650a96bea37f593d95285f0e62772e021
f0756d27

Documento generado en 22/10/2021 03:49:11 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA
OJEDA INSUASTY

Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno
(2021).

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicado: 52001-33-33-003-2018-00189-00.

Número interno: (10082).

Demandante: Alvear Edier Enrique Ayala

Demandado: Policía Nacional – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.

Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación contra sentencia de primera instancia.

Auto No. D-003-411-2021

I. Asunto.

Se pronuncia la Sala respecto a la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El 3 de marzo de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto negó las pretensiones de la demanda y

condenó en costas a la parte demandante¹. La decisión fue notificada personalmente a las partes mediante correo dirigido a sus buzones con remisión del 5 de marzo de 2021 (PDF 37).

- Inconforme con lo adoptado, la parte demandante presentó escrito de apelación el día 15 de marzo de 2021 (PDF 38).
- El 15 de abril de 2021, la judicatura concedió el recurso de alzada y en consecuencia dispuso la remisión del expediente (PDF 40).
- El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020² y 637 del 6 de mayo de 2020³, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁴.

¹ PDF 36

² Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁴ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

III. Consideraciones.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encontrándose el asunto pendiente de resolver acerca de la admisión al recurso de alzada, es indispensable traer a presente las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y el cual en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para los procesos iniciados en trámite anterior de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En este sentido, debe analizarse el momento en el cual se notificó la providencia, y se interpuso el recurso, para establecer desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto, negó las pretensiones de la demanda mediante fallo calendarado al 3 de marzo de 2021. El fallo en cita, les fue notificado personalmente a las partes

el día **5 de marzo de 2021**, esto en vigencia de la reforma que introdujo la Ley 2080 de 2021.

Al respecto, la parte demandante interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el **15 de marzo de 2021**. Actuación realizada dentro de términos de términos⁵.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte **DEMANDANTE**.

SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO.- CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

⁵ El término transcurrió entre los días **8 de marzo y 19 de marzo de 2021** (art. 243 CPACA).

Firmado Por:

**Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**b4382f87d540eccb11c015d3dc0dbe6868125db66b19d15b2d590
58920a3a2c7**

Documento generado en 22/10/2021 03:49:15 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
MAGISTRADA PONENTE: SANDRA LUCÍA
OJEDA INSUASTY

Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno
(2021).

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicado: 52001-33-33-003-2018-00247-00.

Número interno: (10127).

Demandante: Luis Enrique Munares Legarda

Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.

Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación contra sentencia de primera instancia.

Auto No. D-003-413-2021

I. Asunto.

Se pronuncia la Sala respecto a la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El 17 de marzo de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto negó las pretensiones de la demanda y

condenó en costas a la parte demandante¹. La decisión fue notificada personalmente a las partes mediante correo dirigido a sus buzones cuya remisión data al 18 de marzo de 2021 (PDF 23).

- Inconforme con lo adoptado, la parte demandante presentó escrito de apelación el día 6 de abril de 2021 (PDF 25).
- El 26 de mayo de 2021, la judicatura concedió el recurso de alzada y en consecuencia dispuso la remisión del expediente (PDF 27 y 28).
- El Gobierno Nacional en virtud de los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020² y 637 del 6 de mayo de 2020³, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los cuales se expidieron varios decretos legislativos, con el fin de conjurar los efectos de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos⁴.

¹ PDF 22

² Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (17 de marzo de 2020).

³ Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto (6 de mayo de 2020).

⁴ En consecuencia se suspendieron términos por el Consejo Superior de la Judicatura así:

- Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 6 hasta el 20 de marzo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11521 de 19 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020: Suspendió términos desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020.
- Acuerdo PCSJA2011546 de 25 de abril de 2020: Suspendió términos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
- Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020: Suspendió términos desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.

III. Consideraciones.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encontrándose el asunto pendiente de resolver acerca de la admisión al recurso de alzada, es indispensable traer a presente las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y el cual en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para los procesos iniciados en trámite anterior de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán

Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020: Suspendió términos desde el 9, también dispuso levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.

respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones” (negrillas fuera de texto).

En este sentido, debe analizarse el momento en el cual se notificó la providencia, y se interpuso el recurso para establecer desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto, negó las pretensiones de la demanda mediante fallo calendarado al 17 de

marzo de 2021. El fallo en cita, les fue notificado personalmente a las partes el día **18 de marzo de 2021**, esto en vigencia de la reforma que introdujo la Ley 2080 de 2021.

Al respecto, la parte demandante interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el **6 de abril de 2021**. Actuación realizada dentro de términos de términos⁵.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte **DEMANDANTE**.

SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO.- CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

⁵ El término transcurrió entre los días **19 de marzo y 9 de abril de 2021 (art. 243 CPACA)**.

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

4bf4806eeb0705f0c34ac01b44aefea458e2bca74a47be42e5c2712
8675336c8

Documento generado en 22/10/2021 03:49:18 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO MAGISTRADA PONENTE: SANDRA
LUCÍA OJEDA INSUASTY**

Pasto, veintidós (22) de octubre de dos mil
veintiuno (2021).

Medio de control: Reparación directa.
Radicado: 52-001-33-33-009-2018-00200.
Número interno: (10135).
Demandante: Lucía de Jesús Benavides Villareal.
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.
Referencia: Auto de admisión al recurso de apelación
contra sentencia de primera instancia.

Auto No. D-003-413-2021

I. Asunto.

Se pronuncia la Sala sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto.

II. Antecedentes.

- El día 17 de noviembre de 2020, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto negó las pretensiones de la demanda¹. La providencia fue notificada personalmente al

¹ PDF 14

buzón electrónico de las partes mediante correo que data al 20 de abril de 2021 (PDF 15).

- El 23 de abril de 2021, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación (PDF 16).
- El 13 de mayo de 2021, la judicatura concedió el recurso de alzada y dispuso remitir el expediente a Oficina Judicial para lo de su cargo (PDF 17 – 20).

III. Consideraciones.

3.1 Apelación de sentencias – Régimen de vigencia y transición.

Encontrándose el asunto pendiente de resolver acerca de la admisión al recurso de alzada, es indispensable traer a presente las siguientes consideraciones:

El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó el trámite de apelación en contra de sentencias en los siguientes términos:

*“Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguiente a su notificación. (...).*

Por su parte, el 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, la cual modificó la Ley 1437 de 2011, y el cual en lo que atañe al régimen de aplicación y vigencia para los procesos

iniciados en trámite anterior de la legislatura anterior estableció:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***

***En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”** (negrillas fuera de texto).*

En este sentido, debe analizarse el momento en el cual se notificó la providencia, y se interpuso el recurso, para establecer desde cuando empezaron a correr los términos para impugnar la decisión.

3.2 Caso concreto.

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto, negó las pretensiones de la demanda mediante fallo calificado al 17 de noviembre de 2020. El fallo en cita, fue notificado personalmente a las partes el día **20 de abril de 2021**, esto en vigencia de la reforma que introdujo la Ley 2080 de 2021.

Al respecto, la parte demandante interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el **23 de abril de 2021**. Actuación realizada dentro de términos de términos².

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte **DEMANDANTE**.

SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente a la señora Agente del Ministerio Público y por estados electrónicos a las partes.

TERCERO.- CORRER TRASLADO por el término común de diez (10) días, para que las partes presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de manera escrita, habida cuenta que se considera

² El término transcurrió entre los días **23 de abril y 6 de mayo de 2021**, considerando el término de diez (10) previsto en el artículo 247, y contabilizado con los dos (2) días previstos en el ordinal 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.

innecesaria la celebración de Audiencia de alegaciones y juzgamiento, establecida en el artículo 182 del C.P.A.C.A.

CUARTO.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente, para que presente sus alegatos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LUCÍA OJEDA INSUASTY
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Lucia Ojeda Insuasty
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso 003 Administrativa
Tribunal Administrativo De Nariño - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

6e3957d1fb69923c3d6dfdf522f6fbbab814328b21633f814843dce
88a0777b

Documento generado en 22/10/2021 03:49:22 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>